

Presidente pidió a judiciales que acepten su propuesta

SALARIO. Los trabajadores reclaman aumento de 21,6%, pero les ofrecen 15%

El presidente Tabaré Vázquez dijo en el Consejo de Ministros que sesionó ayer en Villa Cardal, Florida, que ya se habilitaron los créditos para hacer efectivo el aumento del 14% previsto para jueces y fiscales, al tiempo que exhortó a los "demás colectivos vinculados al tema" a aceptar la oferta del gobierno de recibir 15% de incremento salarial.

La exhortación va dirigida a los funcionarios judiciales y actuarios que se negaron a firmar el acuerdo que sí firmaron jueces y fiscales, en el entendido de que tienen sentencias judiciales que avalan que el Poder Ejecutivo les adeuda un aumento del 21,6%.



Depende el CPP

Según admitió el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, de la solución de este conflicto depende en parte la buena aplicación del Código del Proceso Penal, previsto para junio, porque será necesario evitar medidas sindicales.

El conflicto de los funcionarios judiciales empezó en 2010, cuando la ley de Presupuesto incrementó el salario de los ministros de Estado pero no de la Suprema

Corte de Justicia, aunque están equiparados legalmente. Esto llevó a que de forma indirecta debieran aumentarse todos los salarios del Poder Judicial.

Como consecuencia del diferendo que los funcionarios judiciales mantienen con el Estado, el abogado Pablo Donnángelo se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos, para que ese organismo se expida sobre el hecho de que el Estado uruguayo no haya acatado una sentencia judicial.

Donnángelo dijo a *El Observador* que no haber saldado la deuda



Los judiciales llevaron el tema a la CIDH . C. DOS SANTOS

es un "acto grave" porque implica que el "Estado es omiso ante una sentencia de la Justicia".

En el escrito presentado por Donnángelo se destaca que "los funcionarios del Poder Judicial se ven inhibidos a fuerza del in-

cumplimiento del Estado de sentencias judiciales firmes de su derecho a la protección jurisdiccional y defender su derecho de propiedad (...) y al derecho a gozar de condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo". ●

PIT-CNT habilitará un 0800 para dar apoyo y recibir denuncias de extranjeros

GRATIS. El servicio fue pensado ante el incremento de la cantidad de trabajadores migrantes

LEONARDO LUZZI
twitter.com/leoluzzi

El PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte trabajan en un proyecto para ofrecer orientación a los trabajadores extranjeros que, en número cada vez más creciente, llegan a Uruguay impulsados por la estabilidad económica del país –en comparación con sus naciones de origen– y por una política gubernamental de puertas abiertas a la inmigración que le facilita los documentos para afincarse.

Uno de las herramientas que impulsa la central de trabajadores habilitar una línea telefónica gratuita 0800 para evacuar consultas de trabajadores extranjeros recién llegados y recibir denuncias de abusos laborales que serán derivadas al Ministerio de Trabajo.

De hecho, en los últimos años inspectores del Ministerio de Trabajo han detectado la contratación ilegal de extranjeros en el sector de servicios, construcción y turismo (ver recuadro).

Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte, dijo a *El Observador* que el objetivo de esa línea telefónica es generar “un mayor conocimiento de los nuevos trabajadores” que recibe Uruguay. En los últimos años el país revirtió la tendencia migratoria y recibió uruguayos que decidieron retornar y a extranjeros que llegan para radicarse.

Castellanos dijo que el servicio también se hace necesario luego de que se detectaran “zonas ocultas” con trabajadores extranjeros a los que se les ofrece empleo zafral. Eso sucede, por ejemplo, en la frontera y está vinculado a emprendimientos forestales y a plantaciones de arroz.

Ante esa realidad, el Instituto Cuesta Duarte organizará seminarios relacionados con los inmigrantes en los departamentos donde se encontraron situaciones irregulares, Artigas, Cerro Largo, Tacuarembó y Maldonado, entre otros.

“Lo que falta es un banco de datos con los perfiles de los inmigrantes”, explicó Castellanos, para saber, por ejemplo, el nivel de formación de los que llegan a trabajar, sus estudios, lugares de



Cada vez más gente procedente de países de la región optan por vivir en Uruguay. P.NAVAJAS

Inspección de Trabajo ataca el informalismo

●●● “En términos globales, la presencia de inmigrantes en las inspecciones del Ministerio de Trabajo es el 2% de los trabajadores”, dijo a *El Observador*, Gerardo Rey, inspector general de Trabajo.

Esa cifra está en línea con los datos del censo del año 2011 que determinó que 2,4% de la población de Uruguay es extranjera.

El jerarca explicó que últimamente hubo un incremento de trabajadores inmigrantes en el sector gastronómico, en el de servicios, como vigilancia y limpieza, y en menor medida en la construcción.

El verano pasado la inspección del Ministerio de Trabajo detectó a 157 extranjeros trabajando fuera de regla en Punta del Este y Piriápolis. En Maldonado “en trabajos nocturnos, como en boliches, se vio un alto nivel de informalis-

mo”, acotó Rey.

En esos casos se aplicaron dos tipos de sanciones a los empleadores. Una, por no tener a los trabajadores registrados en el Banco de Previsión Social. Y la restante por no contar esos extranjeros con habilitación para trabajar. En esos casos la multa puede ser de 100 veces el jornal de cada trabajador.

En la construcción, dijo Rey, se encontró a empresas de Montevideo que contrataban a colombianos sin documentación, sin registro en la seguridad social y todos ellos vivían en un mismo local en Malvín Norte. La inspección intimó a las empresas, estas presentaron documentación, y el informe de jurídica, que determinará si se aplicarán multas y los montos, se dará a conocer esta semana, dijo Rey. Esas obras no fueron clausuradas.

origen y género. Además de gente que busca trabajo, a Uruguay llegan estudiantes, jubilados y familias de alto nivel adquisitivo.

Para el proyecto del 0800 se hicieron contactos con oficinas gubernamentales –de los ministerios de Relaciones Exteriores, Desarrollo, Interior, Salud y Educación, entre otros– a los efectos de que el personal del PIT-CNT que reciba la llamada pueda brindar un asesoramiento amplio.

El servicio de apoyo a trabaja-

dores extranjeros fue anunciado sin demasiado énfasis en el acto del 1º de mayo y ahora se analiza la cantidad de dinero que implicaría ponerlo en marcha.

Mercado

“Son notorios los distintos acentos que se escuchan en la ciudad”, dijo Nelson Montoya, gerente general de Adecco Uruguay, una compañía que, entre otros servicios, coloca gente en el mercado laboral.

Explicó que en Adecco Uruguay

se recibieron varios currículums de venezolanos y cubanos, pero también de gente que llegó de República Dominicana.

Montoya, que es peruano, dijo que varios de esos venezolanos son profesionales (ingenieros, técnicos en logística y en comercio exterior) que “aceptaron un trabajo de menor categoría para insertarse en el mercado”.

El experto en recursos humanos advirtió que de no “controlarse” los flujos migratorios que se verifican

8,2%

fue el desempleo en el mes de febrero según datos del Instituto Nacional de Estadística

18.000

extranjeros, según las estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, pueden llegar este año con intenciones de radicarse en el país

hoy, el mercado laboral de Uruguay, que sigue siendo pequeño, “puede entrar en problemas”. Una idea que manejó es que se impulsen políticas para buscar traer extranjeros con formación en las áreas que necesita el país.

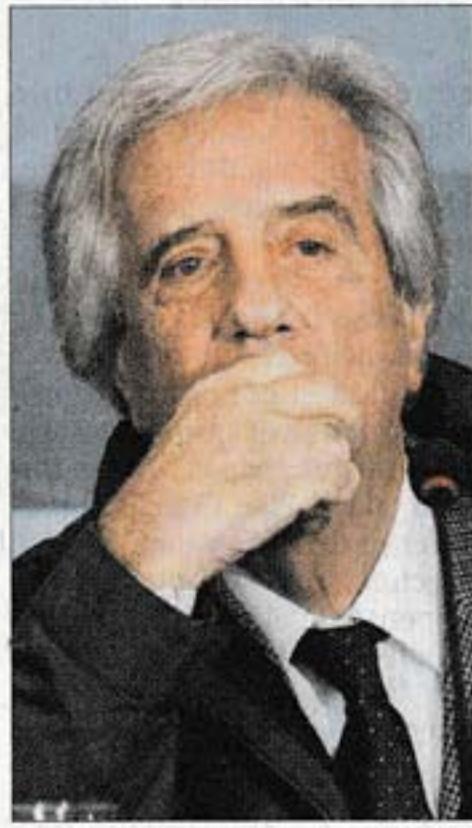
De acuerdo a datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la mayoría de los que llegan a Uruguay para radicarse son oriundos de la región. Para este año se proyecta que 18 mil personas vendrán a vivir a Uruguay, según lo informó en el Parlamento en febrero el vicecanciller José Luis Cancela. Antes, en el mes de octubre, Jorge Muñoz, director general de Asuntos Consulares de la cancillería había dicho a *El Observador* que Uruguay “es un lugar atractivo para la inmigración”. “La seguridad, la tranquilidad, la educación gratuita en los tres niveles, el acceso a la salud y las relaciones laborales”, son factores que hacen del país un lugar para ser elegido para residencia permanente.

Entre octubre de 2014 y febrero de 2017, Uruguay otorgó casi 16 mil residencias permanentes, de las cuales poco más de 8.000 fueron dadas el año pasado. Cancela explicó que los que más llegan a Uruguay son argentinos (42%) y brasileños (18%). Los venezolanos (13%) pasaron a ocupar el tercer lugar entre los que quieren quedarse en Uruguay. ●

Vázquez llamó a judiciales a la “reflexión”

Dio a entender que no les hará otra oferta de aumento salarial

El presidente de la República Tabaré Vázquez exhortó una vez más a los funcionarios judiciales que mantienen su reclamo de un incremento salarial del 21,6% a aceptar la propuesta de un aumento del 15% que los trabajadores rechazaron en una asamblea realizada en febrero. El mandatario los llamó a la “reflexión”. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, ya había hecho un pedido similar. Murro recordó en marzo que la última propuesta del gobierno suponía el pago de US\$ 100 millones



Tabaré Vázquez.

durante tres años a 5.000 funcionarios.

El gobierno llegó a acuerdos con los fiscales, defensores de oficios y jueces y el presidente Vázquez anunció ayer, durante el Consejo de Ministros realizado en Cardal (Florida) que ya se habilitaron los créditos correspondientes para el pago.

Eduardo Silveira, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, dijo a *El País* que el gremio encargó un estudio técnico para demostrar que el Estado cuenta con recursos para por lo menos conceder la actualización salarial del 21,6% que reclama el sindicato (serían unos US\$ 50 millones).

El origen del conflicto es la aprobación durante el anterior

gobierno del “enganche” de las remuneraciones de los judiciales con las de los ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia. El anterior gobierno adujo que nunca tuvo la intención de que hubiese un “enganche”. La oposición, en particular el Partido Nacional, ha cuestionado duramente lo que entiende fue un grave error de redacción en la ley presupuestal que habilitó el “enganche”.

El sindicato insiste en que reclama solamente la adecuación salarial y que está dispuesto a negociar en una etapa posterior el pago de la deuda que entiende que se ha generado por el no incremento de los sueldos. El sindicato tiene a su favor una sentencia judicial firme, pero el artículo 733 de la

Rendición de Cuentas condicionó ese pago a que el gobierno cuente con fondos. El sindicato considera que ese artículo es inconstitucional. Y ha elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un planteo contra el Estado uruguayo por el no cumplimiento de la sentencia.

Como medidas de protesta, el gremio decidió el mes pasado que en los asuntos de contenido patrimonial en los cuales el Estado sea actor los trabajadores no tramitarán los expedientes y no concurrirán a los cursos de capacitación para la implementación del nuevo Código Procesal Penal (que comenzará a aplicarse este año) y el Código de Procedimiento Aduanero.

A blanquear

Preocupación en el Frente Amplio y en la oposición por falta de información sobre negociaciones con UPM

El gobierno se apresta a firmar a fines de junio un acuerdo de inversión con la empresa finlandesa UPM para la construcción de una segunda planta de celulosa, esta vez a orillas del río Negro. Así lo anunció ayer el presidente Tabaré Vázquez durante el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Cardal. A nivel público, no se conocen con certeza ni siquiera los temas de negociación, y este punto comenzó a inquietar a la oposición, que anuncia llamados a comisión y pedidos de informes. En el Frente Amplio (FA) también hay inquietud: el Movimiento de Participación Popular (MPP) pidió discutir el tema en la Mesa Política de la coalición.

A mediados de abril, la mesa de la Departamental de Montevideo del FA transmitió a sus integrantes que el gobierno no daría más información sobre las negociaciones con UPM en ese ámbito, para evitar filtraciones a la prensa. Desde entonces, el tema no se ha podido discutir allí. Por este motivo, el MPP pidió que el asunto se debata este viernes en la Mesa Política del FA. El diputado del sector por Montevideo, Julio Battistoni, dijo a *la diaria* que está "absolutamente en contra" de la instalación de UPM en las condiciones definidas por el Ejecutivo, que implican la llegada de la producción hacia el puerto de Montevideo por vía férrea, cortando en dos la capital del país y la ciudad de Las Piedras, en Canelones. Battistoni alertó que no sólo se deja "de lado un proyecto estratégico para el país, como el puerto de Puntas de Sayago", sino que con el pasaje de los trenes por las vías previstas "se corta definitivamente a la ciudad [Montevideo]", lo que supone "un daño enorme para una zona problemática" de la capital.

Battistoni fue uno de los firmantes de la carta en la que un grupo de dirigentes políticos y representantes de la cultura y la academia expresaron su "profunda preocupación por el posible impacto ambiental asociado a la concreción de la infraestructura ferroviaria y portuaria" que demanda el proyecto de la pastera. También firmaron el pronunciamiento los ex intendentes de Montevideo Mariano Arana y Ricardo Ehrlich, la senadora de Casa Grande Constanza Moreira y el historiador Gerardo Caetano. Otros sectores del FA no comparten esta preocupación. El diri-

gente del Partido Comunista Daniel Marsiglia sostuvo que ese sector "nunca se opuso a las inversiones de ningún tipo" y que el proyecto de UPM significa "una fuente de trabajo para nuestra gente". Agregó que "está claro" que lo planteado en las negociaciones con la empresa en materia de derechos laborales va "en sintonía" con las políticas del FA, y estimó que el gobierno actuó acorde con la fuerza política al negarle a UPM la exoneración del Impuesto al Patrimonio.

Llamados y pedidos

En el Partido Nacional, sus principales dirigentes emprendieron acciones para reclamar más información sobre el tema a las autoridades. El senador Luis Lacalle Pou dijo este fin de semana en Fray Bentos, según recogió el diario *El País*, que citará a la Comisión de Industria a los ministros involucrados en las negociaciones para saber "en qué están" las conversaciones y para que "los uruguayos sepan qué es lo que se viene acordando". El legislador había dicho en su audición radial, la semana pasada, que hasta el momento se cuenta con "información parcial" y falta "una visión integral, una información oficial de cuáles son las tratativas, de qué es lo que se está negociando en todos los ámbitos: de infraestructura, portuario, ambiental, laboral".

Aclaró que "*a priori*" el Partido Nacional tiene una posición favorable a la instalación de la pastera, pero quiere tener claro qué recursos va a destinar el gobierno al proyecto y si se alterarán los planes de otras obras que estaban comprometidas. Según Lacalle Pou, los nacionalistas también quieren saber "qué

están negociando en el ámbito de las relaciones laborales, porque hay algunas intenciones por parte de la empresa que no se condicen con las políticas laborales y sindicales del gobierno". "Las negociaciones transparentes y claras de un gobierno ayudan a la cohesión, ayudan a la convicción, ayudan al conocimiento, para que cada uno, desde su lugar, pueda tener todos los elementos", concluyó el legislador.

Por su parte, el senador nacionalista Jorge Larrañaga informó el viernes que remitió tres pedidos de informes sobre UPM. El primero, destinado al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, apunta a conocer las garantías establecidas por el gobierno para el cuidado del medioambiente en este caso. Larrañaga enfatizó que deben brindarse "todas las garantías de cuidado al medioambiente y a los recursos como el agua", y expli-

có que se quiere conocer "el impacto acumulativo que tendrán ambas plantas de UPM en la confluencia de los ríos Negro y Uruguay".

En ese pedido de informes Larrañaga cita la exposición de los científicos Luis Aubriety Guillermo Chalar en el *media lab* de *la diaria* (<http://ladiaria.com.uy/UNw>), quienes evaluaron que el río Negro ya está en una situación "crítica" y que el impacto de la pastera sería "muy significativo", afectando otros usos del agua. El senador pide al ministerio que le envíe los "avances del estudio de impacto ambiental" de la planta, así como "un informe sobre las medidas previstas para evitar un aumento sustancial de la contaminación del río Negro así como del río Uruguay, en este último caso como consecuencia del efecto acumulativo del impacto de ambas plantas de celulosa". Larrañaga también consulta en qué

medida la instalación de la empresa UPM sobre el río Negro afectaría la generación hidroeléctrica de UTE, así como otros "usos comunes" del agua, y hasta qué punto lo proyectado "respeta los planes de ordenamiento territorial aprobados con participación de la población y de acuerdo a la normativa vigente".

El segundo pedido de informes, con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, consulta qué exoneraciones impositivas se aplicarán a UPM y el monto del canon que abonará la empresa. Finalmente, el tercer pedido, dirigido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pregunta cómo se han resuelto "los principales desafíos de infraestructura y transporte" que supone el proyecto, y "quién pagará la infraestructura necesaria".

Carol Aviaga, legisladora del Partido Nacional e integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, dijo a *la diaria* que tiene una "preocupación enorme" porque "no hay información sobre lo que está negociando el gobierno con UPM". "No hemos tenido acceso a ningún proyecto que hayan presentado para hacer una evaluación ambiental estratégica. Si no se hace una evaluación, estamos violando compromisos que Uruguay ha suscrito en materia ambiental", advirtió la senadora. Agregó que "sería muy peligroso cargar aún más el ecosistema del río Negro, que está muy comprometido en su biodiversidad". También cuestionó que se siga otorgando "beneficios a multinacionales que no se dan a las empresas nacionales", y consideró que las exoneraciones impositivas luego "se cargan al resto de la población", con lo que se "sociabilizan los costos y no las ganancias" de la empresa.

El presidente Tabaré Vázquez dijo ayer que los puntos de la negociación con UPM recién se conocerán cuando se haya firmado el acuerdo de inversión, porque "hasta ese momento hay un acuerdo de confidencialidad, como en cualquier negocio, y el gobierno lo va a respetar". ■



Ramón Alcolea

¡Urreta!

Pese a venta de predio e intimación de desalojo, "el refresco U va a seguir en la mesa de los salteños y de todos los uruguayos"

LA COOPERATIVA Fuente Salto (Cofuesa), que elabora los refrescos marca U y envasa el agua mineral Su Agua, recibió una intimación de desalojo del predio donde tiene la planta, informó *El País* el domingo. Sin embargo, no están en peligro las fuentes de trabajo ni la producción, debido, primero, a que "el plazo para el desalojo es el 1º de febrero de 2018, y luego empieza el proceso de lanzamiento, que lleva varios meses más", y a que, segundo, "ya tenemos un plan B" para trasladar la fábrica a otro predio, aclaró a *la diaria* el presidente de Cofuesa, Osiris Fernández.

En Salto, los refrescos Urreta y Agua Salto comenzaron a elaborarse en 1928, en una fábrica que llegó a ocupar a más de 100 tra-

jadores en tres turnos y a producir además hielo, aceite de oliva y chacinados, entre otros productos. En la segunda mitad de la década de los 90, la empresa hizo un acuerdo con Pilsen, que pasó a encargarse de la distribución de Agua Salto en todo el país. En el año 2000 la empresa quebró y los trabajadores pasaron a gozar de un seguro de paro que se extendió por casi dos años. En 2002, los representantes legales de la empresa ofrecieron a los trabajadores el predio en arrendamiento "gratis" por 15 años y las maquinarias pasarían a propiedad de los operarios, como forma de cancelar la deuda que se mantenía con ellos. Así nacieron el proyecto Cofuesa y la marca U, en plena crisis. Las marcas Urreta y Agua Salto

fueron adquiridas por Nix y Nativa, que actualmente pertenecen a la multinacional chilena Compañía Cervecerías Unidas.

No obstante, lo que ocurrió fue que el Banco de Previsión Social (BPS) se quedó con la propiedad del predio por las deudas que la empresa mantenía con la entidad y, si bien Cofuesa intentó negociar con el banco una compra, no pudo, y hace poco, un conocido empresario de Salto, vinculado al negocio de la venta de automóviles, adquirió la deuda y se quedó con los títulos de la tierra. "Quedó una deuda generada porque la empresa no le pagaba al BPS los aportes que les descontaba a los trabajadores, por lo tanto el BPS se quedó con los títulos del predio. Nosotros fuimos

dos veces a hablar con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, pero era una deuda millonaria que no teníamos posibilidades de negociar", contó Fernández. Si bien Cofuesa "golpeó varias puertas del gobierno, ninguna se abrió", agregó.

Según el presidente de Cofuesa, le ofrecieron al empresario "acceder a la compra [de la tierra] mediante una asociación con un privado, pero este dijo que no tiene intenciones de alquilarla ni de venderla, sino que tiene otras intenciones". Pero Fernández advirtió que seguirán intentando negociar. "Tenemos un año por delante y además tenemos un plan B. Cofuesa no va a desaparecer, y el refresco U va a seguir en la mesa de los salteños

y de todos los uruguayos. Vamos a acceder a algún predio y vamos a montar una planta industrial. Si no podemos negociar la compra vamos a armar otro emprendimiento. Tenemos 30 años de experiencia en el rubro", aseguró Fernández.

En cuanto a la surgente de la fuente de Agua Salto que está en el predio, Fernández dijo que accederían a un terreno "cercano" en donde existe "una perforación de 20.000 litros por hora" de la sur gente, que si bien "no es lo mismo", "es de una calidad impecable".

Finalmente, Fernández dijo que no han recibido apoyo del Fondo para el Desarrollo y que los dos pequeños préstamos que recibieron del Fondo Raúl Sendic ya los devolvieron "en tiempo y forma". ■

EL PAÍS

FUNDADO
EL 14 DE
SEPTIEMBRE
DE 1918

Directores
JULIA RODRÍGUEZ LARRETA
WASHINGTON BELTRÁN STORACE

MARTÍN AGUIRRE REGULES
(Redactor responsable
Eufemio Masculino 2604 Ap 002)

El gobierno pierde el tren

EDITORIAL

Ta Unión Ferroviaria (UF), el pequeño gremio de AFE que tiene unos pocos cientos de afiliados, volvió a demostrar que tiene más fuerza que el gobierno del Frente Amplio. Desde hace más de una década la UF trabaja todos los intentos de modernizar la gestión de un ente estatal que pierde anualmente más de 20 millones de dólares y que en 2016 llegó a su mínimo histórico en materia de transporte de cargas. Ese bloqueo sigue hasta ahora sin que nadie pueda impedirlo.

La semana pasada el sindicato forzó al directorio de AFE a iniciar una negociación en el ministerio de Trabajo para analizar la reestructura del organismo y la suba de salarios de los maquinistas y encargados de señales. Lo consiguió de la peor manera, ocupando la sede del ente —y golpeando brutalmente las puertas de los despachos de los directores— a pesar de la existencia de un decreto que prohibió la ocupación de las oficinas públicas. Y por supuesto a nadie se le ocurrió desalojarlos no fuera cosa de molestar al poder sindical que gobierna el Uruguay junto a la izquierda.

Ese episodio fue otra prueba de que en AFE solo puede hacerse lo que los sindicalistas aceptan.

La UF se opone a la marcha de Servicios Logísticos Ferroviarios (SLF), una entidad creada para reorganizar los servicios ferroviarios, regida por el derecho privado y encargada de la gestión de los trenes. Sus decisiones suelen ser resistidas por el gremio con unas medidas que no solo hunden más a la empresa sino que perjudican a terceros y hasta sabotean los grandes proyectos del gobierno.

Prueba de ello es la sucesión de atropellos sindicales consumados en ese ámbito en los últimos meses. El más grave fue dejar a pie a los técnicos finlandeses que, enviados por la pastera UPM, vinieron en marzo a relevar el estado de las vías férreas que unen a Montevideo con Paso de los Toros, ciudad en cuyas inmediaciones podría instalarse la tercera planta de celulosa. Paros parciales sorpresivos impidieron que el personal del ente transportara a los finlandeses, que debieron meter violín en bolsa y tomarse el avión a Helsinki con las manos vacías mientras la UF cantaba victoria. Lo peor del caso es que ni el directorio de la empresa pública ni el mismísimo

gobierno lograron hacer algo para evitar el bochorno.

Antes de consumar esa fechoría habían boicoteado con todo éxito la temporada de los cruceros turísticos al suspender las giras en tren organizadas para decenas de cruceristas por las bodegas de Canelones. Ni siquiera permitieron que los visitantes se desplazaran en un ferrocarril, reconstruido y cuidado por la Asociación Uruguaya de Amigos del Riel, ante la desesperación del ministerio de Turismo, cuyos ruegos fueron desoídos por la UF. Otros ejemplos de ese constante sabotaje podrían citarse hasta el colmo de uno de los últimos, el consumado días atrás cuando arribaron a puerto varios vagones importados de Suecia, pero que allí quedaron porque el gremio se negó a movilizarlos.

Todo esto ocurre a vista y paciencia de unos gobernantes que siguen declarando su intención de recuperar el ferrocarril sobre todo para el transporte de cargas, algo esencial para la instalación de la tercera planta de celulosa. En los episodios citados la UF se salió con la suya en base a prepotencia, un arma que utiliza con frecuencia para presionar a los empleados de AFE proclives a aceptar su incorporación a SLF, lo que equi-

Con la reciente ocupación de la sede de AFE, el sindicato del ente confirma que el poder gremial se impone ante el gobierno de un Partido que ha sido doblegado en su intento de modernizar el sistema ferroviario nacional.

vale a mejorar su situación, pero que al mismo tiempo los integra al régimen de los trabajadores privados. Y ya se sabe que para los dirigentes sindicales hablarles de esa equiparación con los privados es como mentarles al diablo.

Para la nueva planta se necesita poner en condiciones el sistema ferroviario a un costo estimado de 500 millones de dólares, para los cuales se busca financiación. Aparte de la restauración de las vías y de la compra de locomotoras y vagones, el ente entero debe modernizar sus sistemas de trabajo en todos los órdenes. También es preciso capacitar a los trabajadores, cosa que la UF también sabotea como dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, quien se quejó de que los funcionarios se niegan a realizar cursos para prepararse en el manejo de señales.

En suma, tres gobiernos sucesivos del Frente Amplio ansiosos por mejorar el servicio de trenes se estrellaron hasta ahora contra el gremio de AFE, configurando así un ejemplo mayúsculo del predominio sindical sobre las decisiones oficiales. De ese modo, la UF sigue mandando ante la inaceptable resignación de un gobierno cuya capacidad de mando en la materia aún está por demostrarse.